



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD XOCHIMILCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA

MÓDULO XII: SOCIOLOGÍA Y SOCIEDAD

24P

ASESOR:

DR. RODRIGO RUBÉN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

LAS CARAS DE LA MILITARIZACIÓN EN CHIAPAS

PRESENTA:

ANA MARÍA AKASHEH MÉNDEZ (2203053796)

MICHELLE ANGY VILLALOBOS CERON (2203055987)

RESUMEN

Este trabajo analiza el actuar y los objetivos de la militarización en Chiapas, México. Se enfoca en las consecuencias de la militarización en los diferentes escenarios políticos, económicos y sociales. Recientemente dentro del contexto político nacional, se ha legitimado como nunca el poder militar, y se ha intensificado la militarización sobre la vida civil. En el estado de Chiapas, la militarización no comienza a partir del reciente contexto, pero se ahonda en este proceso. Un recorrido de documentos históricos, informes, estudios académicos y notas periodísticas, muestra el contexto histórico y permite hacer una interpretación de la militarización actual. Este mismo recorrido cuenta que, la estrategia militar continúa siendo el mecanismo básico de control sobre los pueblos en Chiapas. Por lo cual ha contribuido a la fragmentación del tejido social de los pueblos. Al mismo tiempo argumenta que la militarización opera en la lógica de despojo y acumulación capitalista. Esta teorización sobre la militarización lleva a la discusión del proceso de despojo, violencia, represión y acumulación capitalista. El desarrollo de esta reflexión, encuentra las resistencias de los pueblos originarios que con la organización, crean y caminan hacia otros horizontes. Este camino propone la reconstrucción de la colectividad, el tejido social y la búsqueda de alternativas frente a la militarización y frente a los proyectos de destrucción y muerte que la acompañan.

Palabras clave: militarización, despojo, violencia, represión, acumulación del Capital, Chiapas, resistencias de comunidades originarias

ABSTRACT

This paper examines the actions and objectives of militarization in Chiapas, Mexico. It focuses on the consequences of militarization across the political, economic and social context of Chiapas. Recently, within the national political context, military power has been legitimized as never before, and militarization of civilian life has intensified. In the state of Chiapas, militarization did not begin in this recent period, but it has deepened in this process. A review of historical documents, reports, academic studies and journalistic notes, illustrates the historical context and allows for an interpretation of the current militarization. This study indicates that the military strategy continues to be a key mechanism of control over the people of Chiapas. This has consequently contributed to the fracturing of communities. It

also argues that militarization operates in the logic of dispossession and capitalist accumulation. Such theorization on militarization leads to the discussion of the process of dispossession, violence, repression and capitalist accumulation. The unfolding of this reflection brings us to the resistance of the maya peoples who, by organizing themselves, create and move towards demilitarized horizons. They propose the reconstruction of the community, and seek alternatives in the face of militarization and the projects of destruction and death that accompany it.

Key words: militarization, dispossession, violence, repression, Capital accumulation, Chiapas, indigenous peoples' resistance.

DEDICATORIA & AGRADECIMIENTOS

Al EZLN

A las Abejas de Acteal

A quienes luchan contra el sistema capitalista y luchan por un mundo sin opresión, explotación y sin patriarcado.

A las mujeres que luchan por la vida.

A todxs aquellxs que siembran Semillas de Rebeldía, su ejemplo de lucha alimentan la esperanza de otro mundo posible donde todxs podamos vivir en libertad y en Lekil kuxlejal.

A Rodrigo Rubén Hernández González por su apoyo y asesoría, por la enseñanza y por compartir el conocimiento desde la mirada colectiva.

No olvidamos a nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS.

VIVA PALESTINA LIBRE – DESDE EL RIO HASTA EL MAR.

Al Padre Marcelo Pérez Pérez

A mi familia que son un respaldo, una muestra de amor y un pilar fundamental en mi camino universitario, pues han sido y siguen siendo parte de mi crecimiento personal y académico

A mis mascotas que me brindaron su compañía en mis noches de desvelo. - M

Wokolabalik jtatiketik sok jme'tiketik yu'un jkuxulejaltik

A mi familia por su ejemplo de vida por apoyarme incondicionalmente, por la asesoría en este trabajo y en la vida.

– AM

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO PRIMERO. LAS BOTAS VERDES Y SUS HUELLAS EN CHIAPAS	4
1.1 Las políticas y estrategias de la remilitarización actual de Chiapas.....	4
1.1.2 <i>La reintensificación militar</i>	4
1.1.3 <i>Detrás de la militarización: entre el extractivismo, los grupos criminales, los paramilitares y la violencia del Estado</i>	6
1.1.4 <i>Sobre el Discurso Oficial de la militarización: Desentrañando la estructura del relato político</i>	8
1.2 De la militarización a la resistencia: un acercamiento a la historia de las estrategias de militarización en Chiapas y a las resistencias que buscan horizontes desmilitarizados....	11
1.2.1 <i>La herencia de militarización: un contexto histórico precedente a 1994</i>	11
1.2.2 <i>La estrategia contrainsurgente</i>	13
1.2.3 <i>La resistencia de los pueblos frente a la militarización: la resistencia Zapatista & la resistencia de Las Abejas de Acteal</i>	16
CAPÍTULO SEGUNDO. MILITARIZACIÓN CAPITALISTA: una herramienta para la acumulación del Capital	20
2.1 Militarismo y acumulación.....	20
2.2 Acumulación por desposesión y militarización.....	22
2.3 La militarización en América Latina.....	27
REFLEXIONES FINALES SOBRE EL SENDERO DE MILITARIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TERRITORIO EN CHIAPAS	34

NOTA FINAL.....38

BIBLIOGRAFÍA.....41

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de Chiapas, la militarización ha sido un factor determinante en la vida de las comunidades originarias, hecho que ha influido en su desarrollo y en su relación con el Estado. Desde la época colonial hasta el levantamiento zapatista de 1994, la presencia militar ha moldeado no solo a la estructura social, sino también las relaciones económicas y políticas, pues ha tomado diversas formas, reflejando las necesidades y estrategias del Estado en momentos de contexto de crisis y conflicto político.

En los últimos años, esta forma de militarización ha aumentado, presentándose como la única opción viable para combatir la creciente violencia e inseguridad en el país. Sin embargo, su involucramiento se ha extendido en tareas relacionadas al ámbito civil como la construcción de obras públicas, la administración de puertos y aduanas, la vigilancia de fronteras, y la implementación de programas sociales; lo que refleja un proceso de centralización y militarización de funciones gubernamentales. Además, el Estado ha ido aumentando significativamente los recursos asignados a las Fuerzas Armadas, pues se ha incrementado el presupuesto para el reclutamiento de soldados, el equipamiento militar, la compra de armamento y otros proyectos estratégicos que consolidan el poder y la influencia de las fuerzas militares.

Es necesario entender que la militarización no sólo se trata de la presencia de soldados en la calle, sino de un proceso más amplio de reconfiguración del poder estatal y de las relaciones económicas en torno a la lógica del Capital. En esta lógica el Capital busca controlar los territorios y sus recursos a través de la militarización, convirtiendo la violencia en una herramienta para asegurar la explotación de los bienes comunes como la tierra, el agua y los minerales, que son de vital importancia para las comunidades.

En este sentido, lejos de resolver los problemas de inseguridad y violencia, la militarización ha exacerbado un clima de miedo y hostilidad en las comunidades chiapanecas, pues se encuentran atrapadas en un ambiente en donde la violencia estatal, la violencia paramilitar y la violencia criminal convergen y crean sociedades de miedo. Lo cual ha resultado en una serie de consecuencias devastadoras para las comunidades, ya que el reclutamiento

forzado, el despojo de tierras, los secuestros, las desapariciones, el hostigamiento, los desplazamientos de comunidades y la represión forman parte de la dinámica de violencia en la región.

Bajo este clima, muchas comunidades a pesar de ser amenazadas y silenciadas, continúan organizándose y resistiendo, manteniendo viva la lucha por sus derechos y territorios. Cabe resaltar que la resistencia comunitaria en Chiapas no es nueva, y la lucha de los pueblos originarios por la defensa de la vida sigue siendo un elemento central de su identidad colectiva, pues mediante sus diferentes formas de organización y manifestación política ponen en evidencia la contradicción entre la promesa de paz y justicia del Estado, y las prácticas represivas que perpetúan la desigualdad y la exclusión.

Ante esta compleja realidad, la presente discusión y reflexión tiene como objetivo analizar la forma en que ha operado la militarización en Chiapas, y los objetivos y las consecuencias que ha tenido en términos políticos, económicos y sociales. Para este análisis, se ha utilizado una metodología cualitativa y documental, basada en la revisión de documentos históricos, informes, notas periodísticas y estudios académicos, con el fin de interpretar el contexto histórico y su relación con la militarización actual. El marco de esta investigación se sustenta en una epistemología crítica, que propone la construcción del conocimiento mediante la incorporación tanto las perspectivas históricas de los sujetos, como sus demandas y expectativas futuras, pues solo así es posible integrar también las voces y experiencias de aquellos que han sido históricamente excluidos y marginados.

El análisis comienza con un primer capítulo que ofrece un contexto actual sobre la militarización en Chiapas, abordando entre otros, los conflictos que han surgido en el territorio a razón de la presencia militar. También se detallan las consecuencias generadas por los distintos grupos armados y actores que existen en la región, y se destacan las afectaciones de éstos en las comunidades. Además se incorporan elementos clave para entender la dinámica del conflicto, como el extractivismo y el despojo de tierras que son de vital importancia para los intereses del Capital. Este capítulo también incluye un recorrido histórico que pone en evidencia la militarización de Chiapas como un fenómeno que no es en lo absoluto reciente, sino que ha seguido un proceso con diferentes matices; en este

sentido se identifican tanto los momentos clave de este proceso, como la intervención de estos grupos y las diferentes formas de resistencia que las comunidades han desarrollado frente a la intervención militar. Al conectar estos elementos históricos con el contexto actual se busca ofrecer una comprensión más amplia de las huellas que ha dejado la militarización en las comunidades.

En el segundo capítulo se discuten las teorías y conceptos sobre el militarismo de autores como Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, David Harvey, Rita Laura Segato, Raúl Zibechi y David Barrios Rodríguez, ya que a partir de estos aportes presentamos una discusión que profundiza en la idea de la acumulación originaria del Capital, subrayando que el militarismo es una constante en cualquier etapa histórica marcada por la división de clases. Los autores coinciden en que, el Estado debe poseer tanto el monopolio de la violencia, como las instituciones necesarias para salvaguardar las leyes que favorecen a las élites, garantizando así su control y dominio. Se expone también el rol del ejército en el proceso de despojo y represión de los pueblos, señalando que, la militarización y el capitalismo se retroalimentan pues, a medida que el Capital se expande, la militarización lo sigue de cerca, reforzando su avance. No obstante los autores también abordan las formas de operación ilegal que se desarrollan en paralelo, destacando los grupos criminales y paramilitares quienes coexisten en el mismo Estado, formando una red compleja en la que el militarismo y las dinámicas fuera de la ley convergen para mantener el control territorial y económico en beneficio del Capital.

En las reflexiones finales se presenta una reflexión sobre los objetivos de la militarización y se analizan las consecuencias que esta presencia militar ha generado en las comunidades, pues esto ha modificado su vida cotidiana, sus formas de organización, la forma de resolver y responder a sus conflictos, etc. También se pone énfasis en los programas y proyectos asistencialistas del gobierno que se presentan como beneficiosos para las comunidades. Sin embargo, esto ha traído como consecuencia una serie de problemáticas dentro del tejido social, como la destrucción de la naturaleza, la dependencia a los programas sociales, el despojo de tierras, la represión, entre otras. A partir de ello, se exploran las diferentes perspectivas que aboguen por un horizonte desmilitarizado, destacando las propuestas que buscan alternativas ante la militarización.

CAPÍTULO PRIMERO. LAS BOTAS VERDES Y SUS HUELLAS EN CHIAPAS

1.1 Las políticas y estrategias de la remilitarización actual de Chiapas.

1.1.2 La reintensificación militar

Chiapas actualmente enfrenta un proceso de reintensificación militar que, ha colocado a sus comunidades en una situación cada vez más crítica, en los últimos años la militarización ha aumentado considerablemente (2018 a la fecha). Provocando un entorno en el que la vida cotidiana de las comunidades de esta región se ve profundamente alterada y en muchos de los casos obstaculizada debido a que la violencia en la región es alimentada por factores diversos: disputas territoriales y agrarios, conflictos relacionados con el narcotráfico, tensiones políticas y el extractivismo. Esta situación ha escalado a niveles alarmantes, y los enfrentamientos armados, los asesinatos, el desplazamiento forzado, las desapariciones y el reclutamiento al crimen organizado es un escenario que se ha vuelto común en la región.

Las comunidades en Chiapas se encuentran atrapadas en un fuego cruzado entre grupos armados, grupos paramilitares y el crimen organizado, pues lejos de disminuir los conflictos y la violencia, la presencia militar ha contribuido a su intensificación. Según Fernández (2003) la presencia de las fuerzas militares y paramilitares, así como del crimen organizado varía en cantidad y tipo ya que, la densidad poblacional y la riqueza en recursos naturales que presenta cada zona de Chiapas define quienes actuarán y el número de elementos que se desplegarán, lo cual genera que se aceleren las dinámicas de conflicto y repercute profundamente en la vida de las personas en estas regiones.

En 2021, la violencia paramilitar y del crimen organizado se intensificó contra las comunidades, principalmente en zonas zapatistas y partidarias del zapatismo, siendo el caso de Aldama donde un grupo paramilitar del sector Santa Martha del municipio de Chenalhó dejó muertos y heridos. Esto provocó que las comunidades se vieran obligadas a desplazarse en busca de un refugio temporal. De igual forma en Patria Nueva, Moisés Gandhi, Cruce de Cuxulcá y Nuevo San Gregorio, se denunció que el grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo) secuestró a autoridades

zapatistas, miembros de lo que antes era la Junta de Buen Gobierno de ese Municipio Autónomo, además incendiaron viviendas y atacaron por la noche destruyendo y robando sus cultivos y sus animales. Además en Pantelhó y San Cristóbal de Las Casas sicarios han asesinado a activistas y fiscales. A pesar de las denuncias presentadas continúan los hostigamientos con impunidad (Art of Commune, 2021). El EZLN enfatiza que este contexto está llevando a Chiapas al borde de una guerra civil (EZLN, 2021).

Otro escenario es el plan de reconfiguración territorial promovido por el programa social Sembrando Vida (PSV). Este programa está diseñado oficialmente para mejorar el bienestar en comunidades rurales con altos niveles de rezago social, ofreciendo apoyos económicos y en especie a adultos mayores que residen en estas áreas y que son propietarios o poseedores de al menos 2.5 hectáreas de terreno disponibles para su cultivo. (Programas de Bienestar Social, 2022). Sin embargo, cabe destacar que, estos programas dirigidos a comunidades originarias y campesinas como PSV se han caracterizado por ser asistencialistas y clientelares. Han creado durante años una dependencia y en muchos casos también ha sembrado división y conflictos. DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C, 2021) caracteriza a los proyectos como el PSV como despojos ocultos de la tierra, e identifica la fragmentación y desigualdad social como algunos de los resultados del PSV.

La gestión colectiva de las comunidades originarias y campesinas en México se encuentra en la propiedad comunitaria y en la asamblea comunitaria, las cuales tienen cierto grado de autonomía. Es justo esta forma de organización comunitaria a la que el PSV busca modificar (Ita, Comunidad y autonomía, 2021). Es romper las formas de organización comunitaria. Se impulsa también la individualización de la tierra:

[...] por un lado, los apoyos económicos al destinarse al consumo personal limitan la dinamización de la economía local; por otro lado, al ser destinados personalmente, restan también al fortalecimiento comunitario y construcción del tejido local, limitando la extensión de tierras destinadas al uso común colectivo, lo que contradice la producción de autosuficiencia y la vida en comunidad a partir de la autodeterminación de los pueblos originarios. (Frayba, 2023)

Otra problemática que identificamos son los ataques violentos vinculados al PSV hacia comunidades autónomas zapatistas. Desde 1994 organismos de derechos humanos han

documentado la forma en que, programas sociales gubernamentales sirven como tácticas de contrainsurgencia en el estado de Chiapas. Organizaciones de derechos humanos han denunciado a PSV de continuar esta lógica, en el caso particular de la organización paramilitar de la ORCAO, quienes han secuestrado, torturado, despojado tierras, y desplazado forzosamente a comunidades zapatistas (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 2023). Esta organización de corte paramilitar ha atacado violentamente a comunidades autónomas para intentar apropiarse de los territorios zapatistas en Chiapas, y así registrar nuevas hectáreas para PSV y obtener más recursos (Raúl Romero, 2023). De esta forma el PSV funge como un aparato divisor en las comunidades del Estado de Chiapas.

1.1.3 Detrás de la militarización: entre el extractivismo, los grupos criminales, los paramilitares y la violencia del Estado

El extractivismo como parte del proceso de militarización se manifiesta en los conflictos que surgen dentro de las comunidades. Los representantes de núcleos agrarios zoques, tseltales y tsotsiles durante el “Tercer Encuentro de la Escuela Popular Ejidal y Comunal” manifestaron su rechazo a megaproyectos en sus territorios, y afirmaron que no estos proyectos no contribuyen ningún beneficio para sus comunidades, sino, solo los despoja de sus tierras y espacios sagrados. Además, denunciaron que el capitalismo, las empresas transnacionales y el mismo gobierno buscan profundizar el modelo extractivista a través de la represión de los defensores y defensoras del territorio, disputando así sus tierras mediante violencia, hostigamiento, amenazas, despojos, desplazamientos y criminalización de sus resistencias pacíficas (Chiapas Paralelo, 2021).

Asimismo, la violencia en Chiapas se ve intensificada por su papel como corredor migratorio y por la presencia de estructuras criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Chiapas es esencial, debido a la circulación de personas migrantes, pues la cercanía con la frontera de Guatemala favorece a los grupos criminales, que utilizan la región para el tráfico de drogas, de armas, y para explotar a las personas migrantes. Por lo cual, las disputas por el control de estas rutas han llevado a una alta violencia en los municipios fronterizos del sur, ahí los grupos criminales reclutan y secuestran a jóvenes y al mismo tiempo se apoderan de bienes y recursos de las comunidades, las cuales han sido

las más afectadas por esta violencia, al ser usadas como escudos humanos o campo de batalla (La Jornada e Infobae, 2024).

Con lo expuesto anteriormente, la intensificación de los conflictos y la violencia ha interrumpido el modo de vida de las comunidades chiapanecas, creando un clima de tensión constante y miedo, dado que las incursiones militares junto con el establecimiento de puestos de control y la vigilancia permanente en la región ha restringido la libertad de movimiento de las personas y ello ha traído consigo efectos devastadores, que ya hemos mencionado previamente. Esta intensificación genera una crisis humanitaria en la región, a medida que los grupos criminales controlan el territorio y los recursos y servicios básicos.

La violencia y el desplazamiento forzado han alcanzado niveles críticos, con más de 10,000 personas desplazadas desde junio de 2021 (La Jornada, 2024). La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH) reporta que en el mismo año se registraron 7,117 desplazados debido a la violencia generada por los grupos criminales y por las tensiones políticas. También, el MUCD (México Unido Contra la Delincuencia, 2024) destacó que muchos municipios habían caído bajo el control del crimen organizado, generando un clima de terror e impunidad, pero que la creciente militarización agravó la situación, con al menos 18 cuarteles de la Guardia Nacional construidos sin la consulta previa requerida de las comunidades. Estos cuarteles, ubicados estratégicamente, también están asociados con la promoción de actividades sociales y económicas que fragmentan la cohesión comunitaria, contribuyendo a la crisis humanitaria que se presenta en la región.

Los habitantes y desplazados de varios municipios de la región de Chiapas han lanzado un desesperado llamado de auxilio a iglesias y organizaciones sociales, pidiendo que presionen al gobierno para que intervenga y detenga la violencia causada por una "guerra" entre grupos del narcotráfico. Siendo el caso de Tila, donde un ataque armado dejó más de 4 mil desplazados, con 17 inmuebles incendiados y dos muertos. Aunque las fuerzas federales y estatales intervinieron, los habitantes denunciaron que la violencia y extorsiones por parte de grupos criminales, como "Los Karma", han persistido, lo cual ha generado en la comunidad una sensación de abandono por parte del Gobierno (Chiapas paralelo, 2024). En Chicomuselo, un enfrentamiento entre bandas criminales provocó 20 muertes y forzó el desplazamiento de comunidades como Nueva Morelia y otras comunidades cercanas, a

causa del miedo de nuevos ataques, y aún con la presencia de la Guardia Nacional en esta zona y de un cuartel militar, los pobladores criticaron su retirada durante los enfrentamientos y su nulo desarrollo para combatirlos. (Educa, 2024). Esta situación ha provocado un éxodo masivo de personas que huyen de sus comunidades para protegerse de secuestros, asesinatos y otras atrocidades cometidas por estos grupos criminales. Los pobladores suplican ayuda urgente, ya que han expresado que sus vidas corren peligro y no reciben el suficiente apoyo gubernamental (Coutiño, 2024).

1.1.4 Sobre el Discurso Oficial de la militarización: Desentrañando la estructura del relato político

Ahora bien, esta escalada de militarización ha sido justificada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como parte de una estrategia para garantizar la estabilidad y seguridad del país. De esta manera, en el Plan de Seguridad Nacional (2019) se argumentó la necesidad de integrar a las fuerzas militares en la seguridad pública, ya que la violencia, los asesinatos y la criminalidad habían convertido a México en uno de los países con más inseguridad en el mundo, y para combatir este clima se justificó en disponer de las Fuerzas Armadas para la construcción y preservación de la paz.

Asimismo, se menciona que la Guardia Nacional se creó como una solución temporal y el objetivo inicial era la incorporación de 140,000 elementos en los cuales se incluía al Ejército, a la policía Naval y a la policía Federal, priorizando su despliegue en áreas de alta violencia, como Chiapas. Por lo cual, en 2019, Chiapas recibió un despliegue significativo de 3,369 elementos de la Guardia Nacional para enfrentar la violencia y regular la migración (Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2019). En el año 2020, se destinaron 1,962 millones de pesos para fortalecer a las Fuerzas Armadas y de seguridad, subrayando la importancia de combatir la inseguridad, la violencia y los conflictos armados (El Economista, 2020).

En este sentido, la militarización se presentó por el Gobierno como una estrategia necesaria para garantizar la estabilidad y seguridad en respuesta a la creciente violencia, criminalidad e inseguridad que se vivía en el país; esta justificación se tradujo en un incremento del poder militar, una mayor presencia de cuerpos armados en la vida civil y un aumento de

recursos y presupuesto a las Fuerzas Armadas, lo cual llevó a la implementación de una estrategia de seguridad renovada que incluyó la creación de la Guardia Nacional; una nueva fuerza que vinculaba al Ejército con las autoridades municipales para reforzar la seguridad y restaurar el orden en las áreas más afectadas.

Sin embargo, este proceso no es simplemente una respuesta a cuestiones de seguridad nacional, sino que refleja una lógica más amplia y compleja, en la que el control militar se entrelaza con los intereses del capitalismo, especialmente en contextos donde busca expandirse y consolidarse. Es por ello que, la militarización, lejos de ser un fenómeno aislado, se convierte en una pieza clave dentro de una estrategia de control y dominación, donde los intereses del Capital se imponen a costa de las comunidades y del tejido social, perpetuando un ciclo de violencia y desintegración que refuerza la lógica del poder dominante. Hoy en día, es común observar a las fuerzas armadas involucradas en actividades que antes eran competencia exclusiva de autoridades civiles, como la gestión de recursos naturales, la implementación de políticas de seguridad pública, y hasta la administración de infraestructuras como los megaproyectos.

Un ejemplo de su intervención en los megaproyectos, es el mal llamado Tren Maya, el cual se presenta como un proyecto de infraestructura que busca según menciona la Gran Guía del Tren Maya (2023) mejorar la movilidad en el sureste de México, impulsar el turismo, revitalizar economías locales, así como preservar el patrimonio cultural y natural de la regiones que atraviesa. Cuenta con una extensión de 1,554 kilómetros y conecta los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Las autoridades han destacado que el Tren Maya no solo beneficiará a los turistas, sino también a las comunidades locales, pues les permite un acceso más rápido a servicios de salud, educación y oportunidades laborales en las áreas urbanas y turísticas. No obstante, grupos como la Resistencia Civil Luz Fuerza del Pueblo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se han manifestado en contra del megaproyecto, argumentando que favorece a empresas transnacionales y vulnera los derechos territoriales de las comunidades originarias, priorizando las ganancias sobre la vida comunitaria (La Jornada, 2022).

Un aspecto fundamental de este proyecto es el rol que desempeñan los militares en su gestión y control debido a que, en el año 2022 para salvaguardar el proyecto, se creó la

empresa estatal Tren Maya S.A. de C.V., en la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) obtuvo el 99% de las acciones, mientras que, el 1% quedó en manos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con un Capital inicial de un millón de pesos. Este movimiento marcó el comienzo de la transición hacia un modelo de administración militar, pues se destaca la importancia estratégica que el gobierno le asignó al proyecto. En septiembre de 2023 el gobierno transfirió la gestión completa del Tren Maya a esta empresa bajo un decreto que declaró la construcción y operación del proyecto como asunto de seguridad nacional, consolidando así el papel central del Ejército en su desarrollo y administración (Poder, 2024).

En este sentido, la militarización con relación al Tren Maya ha generado en las comunidades afectadas un ambiente de tensión y preocupación. En enero de 2023 elementos del Ejército y la Guardia Nacional no solo han irrumpido en la vida cotidiana de las comunidades, también han generado un sentimiento de vigilancia constante, algunos testimonios de los habitantes relatan cómo estos cuerpos de seguridad actúan de escoltas de las vías férreas, asegurándose de que nadie interrumpa el avance de la obra. De este modo, la creciente militarización del territorio no solo implica la protección de la infraestructura del Tren Maya, sino que busca sofocar y reprimir cualquier descontento social que surja por los daños ambientales y las promesas incumplidas que les garantizaron a los pueblos (Avispa Midia, 2023). Asimismo, el control militar refuerza la sensación de imposición del proyecto, alejando aún más a la comunidad de la toma de decisiones que afectan su vida diaria y su entorno, generando un desequilibrio entre los intereses del Estado y las necesidades de las comunidades.

La militarización actúa como una herramienta que, bajo el pretexto de la seguridad refuerza la lógica del Capital, y subordina las necesidades y aspiraciones de las comunidades a los intereses económicos y políticos del Estado. No obstante, este proceso de militarización no puede entenderse sin considerar la interacción con actores como son los paramilitares y grupos criminales, que a menudo actúan como brazos armados del Estado o como fuerzas que operan en paralelo, contribuyendo a la fragmentación y ruptura del tejido social. Estos grupos, al igual que las fuerzas armadas, se insertan en dinámicas de control y represión que sirven para desarticular resistencias locales y consolidar el dominio sobre territorios

estratégicos. La presencia de estos actores y la presencia de la militarización, profundiza la ruptura de las comunidades erosionando su capacidad para organizarse y resistir, generando así un clima de violencia e inseguridad.

1.2 De la militarización a la resistencia: un acercamiento a la historia de las estrategias de militarización en Chiapas y a las resistencias que buscan horizontes desmilitarizados.

1.2.1 La herencia de militarización: un contexto histórico precedente a 1994

A partir de lo expuesto vemos que, en el contexto político nacional, se ha legitimado como nunca el poder militar en comparación con otros sexenios, y la militarización de la vida civil se profundiza. En el estado de Chiapas, la militarización no comienza en este reciente contexto, pero se ahonda en este proceso. Sí bien, el momento trascendental de la militarización fue la contrainsurgencia contra los pueblos Zapatistas y las comunidades no afiliadas con los diferentes gobiernos en turno, es importante señalar que la militarización no dio comienzo tras el levantamiento armado Zapatista en 1994.

Previo a 1994, la estrategia militar era el mecanismo para mantener el control sobre los pueblos. Durante décadas, mayas y campesinos organizados fueron reprimidos por los distintos gobiernos en turno, sus organizaciones fueron perseguidas y sus miembros encarcelados, torturados y asesinados. Fueron múltiples organizaciones, quienes principalmente luchaban por el derecho a la tierra (Domínguez, 2006). Además de la represión estatal, se crearon las llamadas Guardias Blancas: grupos de choque armados y organizados en unidades de tipo paramilitar instruidos por elementos de la seguridad pública, y financiados por finqueros, para defender los intereses de los hacendados y mantener el control de las tierras en Chiapas.

El levantamiento de las y los Zapatistas detonó el cuestionamiento de las estructuras y relaciones sociales, profundamente racistas y diseñadas para mantener sometidos a los pueblos. Como señala Rovira (2024) organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas alertaban sobre la situación de violencias que se gestaban en el estado de Chiapas en las décadas antes del 1994. En específico se señalan las violaciones

a derechos humanos perpetrados hacia pueblos mayas y campesinos organizados, quienes durante generaciones vivieron sometidos por su posición de clase, y sobre todo por la racialización hacia ellos.

El Subcomandante Insurgente Marcos en su texto: Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía, escrito en 1992 y publicado por primera vez en 1994, habla de la opresión y la explotación de los pueblos para el beneficio del Capital. Aunque rica en recursos naturales, la población vivía sumamente empobrecida. Como se ha comentado, la región ya contaba con una presencia militar fuerte, el SubMarcos describe a los militares como los responsables, junto con las Guardias Blancas, de la opresión ejercida sobre los pueblos originarios, y también como actores clave en la protección de los intereses de empresas privadas y del Estado.

No sólo es importante conocer el actuar del Ejército en Chiapas, sino lo que simbolizaba para los pueblos; el ejército en Chiapas era una figura infame y temida entre los pueblos originarios. En la realidad en la que vivían los pueblos, existía la noción de que la principal tarea del ejército era matar, los rumores acerca de la crueldad del Ejército respaldaban esta versión, que servía para ahuyentar a quienes quisieran rebelarse. En este sentido rebelarse significaba enfrentarse a los que eran entrenados para matar a campesinos y mayas¹. Los militares se consideraban intocables, el miedo hacia ellos tenía una dimensión racial, dado que el terror militar tenía como objetivo reprimir e intimidar a los pueblos originarios y campesinos. La percepción de la intangibilidad del poder militar cambió con el levantamiento armado zapatista, ya que, como se mencionó anteriormente, el levantamiento cuestionó las estructuras y relaciones sociales preexistentes, en particular cuestionó el poder militar. Después de todo, si eran tan temibles e impenetrables, ¿cómo podía una pequeña guerrilla de indígenas sorprender y desafiarlos? (SCI Marcos, 2009)

En el año 1993 existían veinticinco puestos militares² que abarcaban desde cuarteles y campamentos militares, hasta destacamentos de la Armada de México y zonas militares. Las tareas militares rondaban en relación a intereses geopolíticos; debido a la proximidad de Chiapas con Centroamérica y a las fuerzas revolucionarias que surgieron allí, había

¹ Subcomandante Insurgente Marcos. México, 02/01/2009.

² CIEPAC, 2006

interés en asegurar que la influencia revolucionaria no cruzara la frontera. Además, se espiaba a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por su acercamiento y acompañamiento a las comunidades originarias. Se reprimía a las organizaciones campesinas en colaboración con Guardias Blancas. También se vigilaba y observaba la existencia de grupos armados en Chiapas (Domínguez, 2006). Este era el mecanismo de producción del Estado para mantener el control sobre los pueblos.

1.2.2 La estrategia contrainsurgente

Como hemos señalado, para el año 1994, la militarización cambió y se profundizó, y se instalaron veintitrés nuevas posiciones militares fijas, sumando a las veinticinco ya existentes. Asimismo se crearon treinta y seis posiciones militares intermitentes. Estas nuevas posiciones se instalaron estratégicamente para cercar la movilización del EZLN en la frontera con Guatemala, zona selva, y zona altos de Chiapas (Domínguez, 2006).

También se implementó el “Plan de Campaña Chiapas 94” (Secretaría de la Defensa Nacional, 1994), como respuesta contrainsurgente a la insurrección del EZLN. Esta estrategia militar tuvo como objetivo implementar una guerra integral de desgaste a las comunidades en Chiapas, estrategia que ha perdurado a través de los diferentes gobiernos en turno a lo largo del tiempo, bajo intereses sobre todo político-económicos impulsados para seguir las iniciativas económicas neoliberales de Estados Unidos. En los años consecutivos Estados Unidos jugó un papel esencial en la respuesta y en el actuar de la militarización en Chiapas.

El levantamiento armado zapatista fue una medida última³ tras 500 años de represión, esto como parte de un proceso de lucha extensa. Tras diez días de enfrentamiento directo entre insurgentes Zapatistas y el Ejército mexicano, después de que miles elementos de las Fuerzas Armadas por tierra y aire intentarían establecer control sobre el territorio recuperado por el EZLN, el 12 de enero se declaró el cese al fuego militar. El cese al fuego representó adoptar un nuevo enfoque estratégico de guerra contrainsurgente; la guerra de baja intensidad (GBI), como táctica para debilitar y dismantelar al EZLN. Carlos Fazio (1996)

³ Primera Declaración de la Selva Lacandona, 1. enero 1994

describe la GBI como un conjunto tácticas de contrainsurgencia, que siguieron una guerra psicológica para aislar al EZLN. Sostiene que la estrategia de GBI está influenciada directamente por la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana formulada por el Pentágono, las cuales han sido experimentadas en otras geografías para el control de la población.

La noción de 'la sombra de Washington' mencionada por Fazio, en el contexto militar en Chiapas, alude al interés estratégico de la integración de México a América del Norte para beneficiar los intereses político-económicos de Estados Unidos. El conflicto en Chiapas creó un obstáculo en los intereses estratégicos y económicos de la región, específicamente para la extracción y exportación de los recursos naturales. Considerando estos intereses geoestratégicos de Chiapas, frente al llamado conflicto, la estrategia del Gobierno mexicano mantuvo dos frentes: sobre la mesa el diálogo, y bajo la mesa hostigamiento militar.

Una de las técnicas utilizadas en la GBI es la guerra psicológica contra las comunidades originarias – zapatistas y no zapatistas - para someterlas y ejercer control sobre ellas. La militarización tiene el propósito de manipular e impactar utilizando técnicas psicológicas en el comportamiento de la población civil, en la vida personal y en la vida colectiva, para así aislar al EZLN en la región. En 1996, la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas publicaron el informe "Militarización y Violencia en Chiapas", en donde hacen un análisis sobre la situación de derechos humanos, el contexto político y social en Chiapas durante el proceso de paz que, paradójicamente ocurre en la fase más intensa de contrainsurgencia. En este informe, las organizaciones civiles documentan y denuncian la presencia y el actuar de los militares en las comunidades originarias, además de su impacto psicosocial en la vida de ellas.

Además de denunciar el actuar militar, también se describe el comportamiento de grupos paramilitares que operan con impunidad en la región: asesinatos, torturas, secuestros, amenazas, quemas de casa, desplazamientos forzados etc. La creación de grupos paramilitares para apoyar las operaciones militares en la región fue una de las tácticas utilizadas en el Plan de Campaña Chiapas 94.

La relación entre Guardias Blancas y paramilitares puede percibirse como estrecha, porque ambos son mecanismos para mantener el control sobre la población por medio de las armas

y de forma violenta. Pero lo que distingue a los grupos paramilitares es que, se forman en el contexto de la GBI, cuyo objetivo es: “Aislar, desgastar, dividir y desorganizar” a las comunidades en resistencia (Frayba, 1999). Aunque en ocasiones las Guardias Blancas actúan en correlación con elementos de la seguridad pública, estos grupos responden a los intereses de los finqueros. Por otro lado, los paramilitares tienen un vínculo directo con el Estado. Históricamente los grupos paramilitares han estado asociados a la ideología reaccionaria en sus diversas formas de representación, como el nacionalismo, fascismo, el anticomunismo, etc.. Los paramilitares y su propensión a la violencia se han utilizado para mantener o extender el poder, tanto de forma social, económica y política (Aristizábal, 2023).

También han actuado como una herramienta para el desgarre del tejido social en las comunidades. Además de los impactos sociales y psicosociales de aislar, desgastar, dividir y desorganizar a los pueblos, la ruptura social ocurre desde la creación de grupos paramilitares. El hecho de que los grupos paramilitares se crean con personas de las mismas comunidades, añade otra capa a la ruptura social. Los paramilitares son los vecinos y en ocasiones también familiares, no son personas ajenas quienes ejercen la violencia. Esto forma parte de la estrategia del deterioro y desgaste de los pueblos, esta estrategia impulsa la narrativa de un conflicto entre grupos indígenas que se matan entre sí, y no de un conflicto creado por el Estado y perpetuado por él. Es otra forma de aniquilar a los pueblos creando un desgarre en el tejido social, así el Estado no se mancha las manos, pero es el actor intelectual quien por medio de la división del dinero; compra y entrena a personas del mismo pueblo para que, se peleen y maten entre sí.

Organizaciones de la sociedad civil empezaron a registrar movimientos de grupos paramilitares en Chiapas en el año 1995. En los primeros doce años de la GBI se identificaron diecisiete grupos paramilitares en la región⁴. La mayoría de los paramilitares se formaron en función de la GBI, pero también hubo otros grupos u organizaciones que ya existían y que se transformaron en grupos paramilitares posteriormente. Sí bien, la relación entre partidos gubernamentales como el PRI y el PRD podría ser obvia, es pertinente destacarla. El vínculo entre paramilitares, militares, policías, y el Estado es aparente, al igual que entre grupos partidistas y grupos paramilitares. Un ejemplo de ello es el grupo

⁴ CIEPAC, 2006

paramilitar Paz y Justicia, financiado por el partido PRI, a través de fondos con destino a supuestos proyectos productivos (León, 2011).

Este último elemento también es fundamental en la dinámica, ya que la interconexión entre los programas sociales y la estrategia contrainsurgente fue y sigue siendo perceptible (Galindo de Pablo, 2015). Los programas de política pública a través de estrategias enfocadas para aparentemente el desarrollo y bienestar del campesinado y su producción, se realizan integrando la economía rural al mercado global. El llamado progreso y desarrollo rural que el neoliberalismo representa, implica la subordinación a través de proyectos y programas mediante un proceso de despojo. Es decir, en completo contraste a la cosmovisión de los pueblos acerca de la tierra, la autonomía y la autogestión. Así mismo, en esta dinámica, los paramilitares responden a los intereses de los programas y proyectos de desarrollo rural, mediante el desplazamiento forzado de pueblos que grupos paramilitares generan a través de las diversas tácticas de violencia.

1.2.3 La resistencia de los pueblos frente a la militarización: la resistencia Zapatista & la resistencia de Las Abejas de Acteal

La resistencia Zapatista

El impacto militar y paramilitar en las comunidades originarias zapatistas, narrada desde sus propias vivencias⁵, nos cuenta la estrategia frente a la militarización: la resistencia. En 1995, ante 60 mil elementos de las Fuerzas Armadas desplegados por Zedillo para capturar al Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General (CCRI-CG), las comunidades bases de apoyo zapatistas optaron por la resistencia pacífica. La estrategia de resistencia se manifestó de diversas maneras según las circunstancias enfrentadas. A veces se requería el retirarse de las tierras recuperadas para no provocar a los militares, otras veces enfrentarlos y sacarlos de su comunidad – sin armas. Mientras el Gobierno mexicano mandaba helicópteros y aviones para vigilar a las comunidades Zapatistas, la

⁵ La libertad según los Zapatistas, 2013.

Fuerza Aérea del Ejército Zapatista mandaba aviones de papel a los militares instalados en su comunidad⁶.

Posterior al 1994 las comunidades zapatistas resistieron ataques constantes que buscaban destruir el trabajo colectivo y dividirlos. Las distintas tácticas empleadas en la GBI, tales como el patrullaje de militares, sobrevuelo de helicópteros, retenes, implementación de bases militares en comunidades, desplazamiento forzado, persecución, hostigamiento, cercamiento del territorio - impedía la movilidad y afectaba la vida de la población civil. Junto con la intervención militar se introdujo el paramilitarismo, herramienta encargada del trabajo sucio y violento de despojar a lxs zapatistas de las tierras que habían recuperado en 1994.

A lo largo de tres décadas, la respuesta Zapatista a la represión del Estado ha sido la resistencia organizada. Frente a las provocaciones, confrontaciones militares y paramilitares, han optado por resguardarse y en ocasiones dismantelar lo que habían construido, para evitar confrontación y así salvar vidas. Ejemplo de ello fue en Tierra y Libertad, en el Caracol de la Realidad, donde soldados encubiertos entraron a la comunidad y destruyeron una casa del municipio autónomo. Ante esta agresión lxs zapatistas en vez de buscar la confrontación y muy posiblemente perder la vida de sus compañerxs, entienden que, una casa es una estructura física y que ésta no alberga exclusivamente a la autonomía. La casa se puede reconstruir y la autonomía se crea en donde sea (SCI Moisés, 2015).

Del mismo modo, cuando el Ejército destruyó en 1995 Guadalupe Tepeyac, el primer Aguascalientes⁷, lxs zapatistas construyeron cinco nuevos Aguascalientes, - años después en el 2003, esos cinco Aguascalientes se convirtieron en Caracoles⁸ en donde se construyó y floreció a profundidad la autonomía. La construcción de la autonomía fue y sigue siendo la forma de resistencia fundamental del EZLN. La organización y resistencia zapatista se centra en priorizar la defensa de la vida, frente a los continuos intentos de fragmentar la organización zapatista, ellxs han puesto en manifiesto lo fundamental que es preservar la vida.

⁶ Ejido Amador Hernández, municipio General Emiliano Zapata, 1999.

Este escrito emplea la “x” de forma incluyente para las diversidades de género.

⁷ Lugar de encuentro entre lxs zapatistas y el mundo.

⁸ Centros organizativos zapatistas

Esta prioridad emerge de nuevo en la reciente reestructuración política del territorio zapatista, que propone la construcción de lo *Común*, ampliando su autonomía con quienes también defienden la vida, a través de la no propiedad, en colectivo, en territorio de nadie y de todos⁹. La propuesta del común recoge los saberes ancestrales y memoria de trabajar en conjunto, en conexión y respeto con la naturaleza y sus habitantes. Este nuevo proceso representa una rearticulación y profundización del sistema autónomo con el que gobiernan. Así mismo, representa la reconstrucción del tejido social de las comunidades.

El común se presenta en medio de un contexto político crítico, ante trenes capitalistas¹⁰, despojo, destrucción, saqueo, disputas territoriales, narcotráfico, militarismo, paramilitarismo, y contrainsurgencia – frente a esto lxs zapatistas se reorganizan para que la niña zapatista Deni que nacerá en siete generaciones siguientes pueda sobrevivir¹¹ (Mariana Mora, 2024). Ante un mundo donde parece impensable sobrevivir con tanta muerte y violencia que trae el capitalismo, lxs zapatistas optan por resistir generación tras generación. El imaginario que nos comparten los zapatistas es de un horizonte en común, y ese horizonte significa resistir.

La resistencia de Las Abejas de Acteal

Los ataques y el hostigamiento militar y paramilitar no se limitaron a las comunidades zapatistas; también alcanzaron a la población civil.

En 1997, dos años después de firmar los Acuerdos de San Andrés, quedaron claras las intenciones del Gobierno mexicano de abandonar el camino de diálogo y negociación. El Gobierno optó por seguir la vía militar y la GBI. La masacre de Acteal en Chiapas marcó un punto crucial en el conflicto; el uso sangriento de grupos paramilitares. Según Caffentzis (1998), la masacre pretendía iniciar una nueva fase del GBI -teniendo en cuenta que los objetivos del GBI no sólo eran para aislar cualquier resistencia, sino también para provocar al EZLN en una confrontación armada, algo que el EZLN no replicó.

⁹ El en el territorio recuperado el primero de enero de 1994

¹⁰ Tren Maya y Tren Transístmico

¹¹ Filosofía Haudenosaunee (Iroquois) - confederación de tribus originarias de América del Norte.

Lxs pobladores de Acteal no eran zapatistas, sino miembros de una organización civil llamada Las Abejas, un grupo tzotzil católico y pacifista, influenciado por la teología de liberación. La masacre perpetrada por paramilitares, quienes meses previos habían hostigado y desplazado a pobladores de la zona, entrenados y armados por el Ejército mexicano, masacraron 45 hombres, mujeres y niños. La masacre reveló hasta qué niveles podía llegar la violencia organizada por el Estado contra las comunidades originarias. El discurso oficial que el Estado mexicano ha sostenido es que ha sido un producto de conflictos internos entre comunidades, eludiendo así su culpabilidad en la masacre.

La nueva etapa colocó a los grupos paramilitares al frente y al centro del GBI, lo que replegó y reubicó a los militares como supuestos pacificadores de la región. Después de la masacre, Acteal fue utilizado como base para sumergir las operaciones militares dentro de las comunidades zapatistas, como pretexto para desmantelar a los grupos paramilitares (Anguiano, 2019).

Tras los años Las Abejas de Acteal han mantenido una postura firme en contra de la militarización y la paramilitarización de sus comunidades. Una de las primeras ilustraciones de esta resistencia ocurrió semanas después de la masacre, cuando se reforzó la militarización en la zona. Frente esto Las Abejas, en específico las mujeres de la organización, junto con las mujeres zapatistas, se manifestaron en contra e impidieron la instalación de un nuevo cuartel militar en sus comunidades¹². Con el objetivo de exigir la retirada de la base militar de Majomut, situada en las cercanías de su comunidad, la organización civil de Las Abejas sostuvo una firme resistencia manifestándose de manera pacífica año tras año frente al campamento militar. Las exigencias de Las Abejas de Acteal no solo buscan la retirada de la presencia militar en su territorio, sino también justicia para lxs víctimas de la masacre, y castigo a los perpetradores paramilitares, así como de los actores intelectuales.

Su lucha también es por la autonomía y por la autodeterminación como pueblos que son, y esta lucha se entrelaza con la lucha de otros pueblos y organizaciones de Chiapas y de México, los cuales resisten a proyectos extractivistas y de despojo¹³. En este camino de lucha se abrieron a recibir en su comunidad a lxs desplazados forzados por la violencia en

¹² El 3 de enero de 1998, X'oyep, Chenalhó.

¹³ Las Abejas de Acteal forman parte del Congreso Nacional Indígena

Chiapas, creando una comunidad y campamento civil por la paz. La defensa de la conciencia y la memoria colectiva busca asegurar la continuidad de la lucha y que las víctimas no sean olvidadas.

Las Abejas de Acteal persisten en la resistencia a través de su compromiso por la defensa de la vida. La resistencia también se sostiene con la exigencia de la desmilitarización del territorio y con exigencia de la justicia por sus mártires. La defensa de la conciencia y la memoria colectiva asegura la continuidad de la lucha y resistencia de la organización frente a las continuas agresiones y dinámicas de violencia que persisten en Chiapas.

CAPÍTULO SEGUNDO. MILITARIZACIÓN CAPITALISTA: una herramienta para la acumulación del Capital

A través de diferentes perspectivas sobre la militarización, exploramos cómo el militarismo ha sido una constante en la evolución del capitalismo y en los procesos de acumulación en las sociedades contemporáneas. Desde la acumulación originaria hasta el extractivismo actual en América latina, este análisis revela cómo el Capital y la militarización interactúan como herramientas de control social, político y económico, consolidando y perpetuando estructuras de poder y explotación.

2.1 Militarismo y acumulación

Tal como menciona Rosa Luxemburgo el militarismo desempeñó un papel notable durante las primeras etapas del capitalismo europeo, debido a que este proceso incluyó la conquista del Nuevo Mundo, de los países productores de la India y otras regiones ricas en recursos. Se describe el militarismo como un instrumento para destruir las organizaciones sociales de las llamadas sociedades primitivas y apropiarse tanto de sus medios de producción como de su fuerza de trabajo.

“El militarismo cumple una función muy definida en la historia del capital, pues acompaña todas las fases históricas de la acumulación. Desempeña un papel decisivo en las primeras etapas del capitalismo europeo, en el período de la llamada "acumulación originaria", como medio de conquistar el Nuevo Mundo y los países

productores de especias de la India. Más tarde, se emplea para someter a las colonias modernas, destruir las organizaciones sociales de las sociedades primitivas para apropiarse de sus medios de producción, introducir por la fuerza el comercio de mercancías en países donde la estructura social le era desfavorable y convertir a los indígenas en un proletariado obligándolos a trabajar por un salario en las colonias [...] el militarismo es un arma en la lucha competitiva entre los países capitalistas por las zonas de civilización no capitalista” (1913, p.225)

Las potencias europeas mediante la intervención del militarismo desmantelaron a las organizaciones sociales preexistentes en las sociedades “conquistadas”, ya que eran percibidas como obstáculos para los sistemas previos al capitalismo, por lo cual mediante la violencia y la coerción se apoderaron de los recursos e impusieron el comercio de mercancías en los territorios que no estaban integrados al mercado global. Este uso del militarismo no sólo facilitó la extracción de recursos, sino también facilitó la transformación de las economías locales para adaptarlas a las demandas del capitalismo, de esta manera se promovió la proletarización violenta de las poblaciones originarias, consolidando su explotación dentro del nuevo sistema económico.

En este sentido, al igual que en el contexto colonial europeo descrito por Luxemburgo, la militarización en Chiapas ha servido para destruir o debilitar las formas de organización comunitaria de los pueblos originarios. Estas comunidades han sido forzadas muchas veces a través de mecanismos violentos a integrar una economía capitalista, donde su tierra y su fuerza de trabajo son utilizados en beneficio de intereses empresariales y estatales. Posterior al levantamiento zapatista de 1994 las fuerzas militares en Chiapas responden a una lógica similar a la que plantea Luxemburgo; la imposición del control estatal se lleva a cabo para asegurar que los recursos y la mano de obra estén al servicio del Capital.

De esta manera el militarismo lejos de ser una anomalía, ha sido un pilar constante en sociedades con divisiones de clases. Cada tipo de sociedad ha desarrollado su propia versión del militarismo para mantener sus estructuras de poder frente a desafíos específicos. En este caso, en el sistema capitalista, el militarismo se adapta y se manifiesta de múltiples formas, no solo a través de ejércitos uniformados y armamento, sino también a través de leyes, cuerpos policiales, seguridad privada y mecanismos de control social. Por lo cual no solo se limita a la guerra, sino que se extiende al control y al mantenimiento

del orden necesario para que el sistema de clases continúe funcionando según sus exigencias.

Liebknecht (1873) menciona que, el capitalismo es el último sistema basado en la división de clases, y hereda la necesidad del militarismo, pero lo adapta a sus propios fines bajo este sistema. El militarismo se moldea a las exigencias del mercado, de la propiedad privada y del Capital:

“El militarismo no es específico del capitalismo. Es, además, normal y necesario en todo orden social dividido en clases, de los cuales el sistema capitalista es el último. El capitalismo, por supuesto, como cualquier otro orden social dividido en clases, desarrolla su propia variedad especial de militarismo] ; pues el militarismo es, por su propia esencia, un medio para un fin, o para varios fines, que difieren según el tipo de orden social en cuestión y que pueden alcanzarse según esta diferencia de diferentes maneras. Esto se manifiesta no sólo en la organización militar, sino también en los demás rasgos del militarismo que se manifiestan cuando lleva a cabo sus tareas” (p.27)

2.2 Acumulación por desposesión y militarización

La militarización entonces se convierte en un medio para la expansión del Capital y el control de los recursos, esto asegura que las clases dominadas no puedan desafiar este orden, debido a que hace uso de la violencia y la coerción para asegurar que los territorios, los recursos y las personas estén al servicio del Capital. Harvey señala que el Capital se desarrolla de manera más eficaz cuando el Estado posee el monopolio de la violencia, pues es a través de las fuerzas policiales que garantiza el marco institucional necesario para que las operaciones de mercado se lleven a cabo sin interrupciones:

“La acumulación del capital mediante las operaciones de mercado y el mecanismo de los precios se desarrolla mejor en el marco de ciertas estructuras institucionales (...) Un Estado fuerte armado con fuerzas policiales y el monopolio sobre los instrumentos de violencia puede garantizar este marco institucional y proporcionarle dispositivos constitucionalmente definidos (...) Pueden optar por violar las leyes cuando los poderes estatales son hostiles (...) Esta ilegalidad puede adoptar formas perversas, como las mafias, los carteles de la droga y otras organizaciones ilícitas (...) Aun así, para la actividad capitalista es preferible un Estado burgués en el que estén legalmente garantizadas las instituciones de mercado y las reglas contractuales”(2003,p.81)

El Estado actúa como un facilitador para el avance de proyectos capitalistas, es decir que, asegura que las instituciones y las leyes favorezcan al mercado, incluso si esto implica la militarización y el despojo de las comunidades. Sin embargo, cuando los poderes estatales son hostiles o no pueden cumplir plenamente sus funciones para beneficiar al Capital, surgen nuevas formas de ilegalidad, como las mafias o los carteles de la droga que actúan en complicidad con el Estado. En Chiapas, la militarización no sólo ha involucrado a las fuerzas armadas, sino que ha coexistido con la presencia de grupos paramilitares y organizaciones criminales que operan en la región, lo que agrava la violencia y el despojo de las comunidades, debido a que estos grupos, a menudo, tienen intereses económicos alineados con los del Capital y operan como "actores ilegales", siendo su intervención lo que facilita el acceso a los territorios y el despojo de ellos.

En este contexto, Harvey (2003) expone que la acumulación por desposesión, debe estar respaldada por el poder estatal y esto puede interpretarse como un medio necesario para lograr el avance del desarrollo capitalista. Este proceso puede estar motivado tanto por factores internos como externos. En el caso de México, el país adoptó por presión de Estados Unidos las prácticas de privatización neoliberal las cuales solo benefician a las élites. En consecuencia, las poblaciones originarias y campesinas quedaron desprotegidas y abandonadas por el Estado, esto provocó que cualquier intento de revuelta en respuesta al Estado para proteger sus territorios fuera reprimido:

Se destruyen los territorios y se despueblan. A la hora que se hace la guerra, se tiene que destruir el territorio, convertirlo en desierto. No por afán destructivo, sino para reconstruir y reordenar. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta este mundo unipolar para globalizarse? Los Estados nacionales, las resistencias, las culturas, las formas de relación de cada nación, lo que las hace diferentes. ¿Cómo es posible que la aldea sea global y que todo el mundo sea igual si hay tantas diferencias? Cuando decimos que es necesario destruir los Estados nacionales y desertificarlos no quiere decir acabar con la gente, sino con las formas de ser de la gente. Después de destruir hay que reconstruir. Reconstruir los territorios y darles otro lugar. El lugar que determinen las leyes del mercado; he aquí lo que está marcando la globalización (Subcomandante Marcos, 2003)

La destrucción de los territorios, no significa el exterminio de la población, sino que implica una transformación dentro del territorio de los pueblos, donde su identidad, sus formas de resistencia organizada, su cuidado de la Tierra y su visión por lo comunitario, debe reorganizarse según las necesidades del Capital. La descomposición de las formas

tradicionales de vida de los pueblos, implica que las identidades que han sido históricamente definidas, deban ser ahora reconfiguradas para adaptarse a las exigencias del Capital. Este proceso es orientado por las leyes del mercado que rigen y establecen las nuevas normas y dinámicas que dictan la interacción entre los pueblos. En este contexto, las identidades son subordinadas a las necesidades del capitalismo, busca así desarticular los modos de vida originarios y a favor de la rentabilidad del Capital.

Así también se pretende la creación de un espacio donde predominen los intereses económicos. Esto conduce al debilitamiento del tejido social y a una erosión de las tradiciones y valores locales, poniendo en peligro la diversidad y riqueza cultural; base integral de cada pueblo, una imposición de un modelo que no piensa en los pueblos y se centra en las ganancias tiende a destruir la vida y el tejido social de un pueblo:

“La etapa capitalista de desarrollo se enfrenta mejor con un ejército basado en el servicio militar universal, un ejército que, aunque esté basado en el pueblo, no sea un ejército popular, sino un ejército hostil al pueblo, o al menos uno que se esté construyendo en esa dirección”(Ibídem, 1913: 229).

Por ello, la existencia de un ejército militar que opera bajo la lógica de hostilidad y que va contra del propio pueblo, facilita la perpetuación de un sistema desordenado y competitivo el cual ignora o incluso atropella los derechos de los pueblos. Este mecanismo sirve al capitalismo en su lucha por obtener recursos y mercados. De esta forma, la función del ejército en una sociedad capitalista, no se limita simplemente a la defensa de amenazas externas, sino que en realidad, cumple una función mucho más profunda bajo el discurso de la preservación y el mantenimiento del orden social interno:

“El ejército del orden social capitalista, como el ejército de cualquier otro orden social dividido en clases, cumple un doble papel. Se trata, en primer lugar, de una institución nacional, diseñada para una agresión externa o para la protección contra un peligro externo; en resumen, diseñada para su uso en casos de complicación internacional o, para utilizar una expresión militar, para su uso “contra el enemigo externo”(Ibídem, 1973, p.22)

El ejército, cumple dos funciones principales: por un lado, está diseñado para enfrentar enemigos externos, aquellos enemigos que atenten y amenacen la soberanía del país, sin embargo en Chiapas, la realidad es distinta, ya que el "enemigo" no viene de afuera, sino desde adentro, de los mismos pueblos que exigen una vida digna. Debido a este contexto, el ejército asume su segundo papel que es, el de proteger el orden social interno, actuando

contra sus propios ciudadanos y así mantener el control de las clases dominantes sobre las dominadas.

En Chiapas, esta idea se materializa, después del levantamiento del EZLN en 1994, el Estado desplegó una presencia militar en la región, no solo como una respuesta a un conflicto armado, sino como un mecanismo de control social, pues las demandas de los pueblos originarios (tierra, justicia, democracia, libertad, autonomía) no eran solo reivindicaciones locales, sino cuestionamientos al orden social y económico dominante, profundamente enraizado en la desigual y explotación. De esta forma, la presencia militar no solo fue para combatir al EZLN sino también para evidenciar que cualquier desafío al sistema capitalista, aunque venga de adentro, será reprimido con la misma contundencia que una invasión extranjera.

Así entonces los pueblos no son tratados con derechos legítimos, sino que son vistos como una amenaza por el orden del Estado y el Capital. Así la militarización se convierte en un instrumento de las clases dominantes, diseñada para mantener el control sobre una región rica en recursos naturales, pero habitada por comunidades empobrecidas que históricamente han sido marginadas y explotadas.

Es así, que el militarismo muestra una relación directa y continua con la expansión del capitalismo, esto es un reflejo de cómo el militarismo se integra profundamente en el sistema capitalista y funciona no solo como una herramienta de defensa, sino como un componente esencial para la perpetuación y expansión a favor del capitalismo:

“Mientras cualquiera otra ampliación del mercado y de la base de operación del capital depende, en gran parte, de elementos históricos, sociales, políticos, que se hallan fuera de la influencia del capital, la producción para el militarismo constituye una esfera cuya ampliación sucesiva parece hallarse ligada a la producción del capital” (Ibídem, 1913: p.231)

Esto es claro con la implementación de megaproyectos, como el Tren Maya, y la extracción de recursos naturales en las comunidades mayas, estos megaproyectos requieren de la fuerza militar para enfrentar las resistencias comunitarias y también reflejan la expansión militar y su fortalecimiento para acceder a dichos territorios. Así, la militarización en Chiapas se nutre del Capital y al mismo tiempo alimenta al Capital y con su presencia en los

territorios da la desestabilidad necesaria para que las empresas puedan operar y extraer recursos.

La expansión del presupuesto para los militares se justifica de esta forma por el aumento de los gastos militares para aumentar la eficacia militar para prevenir cambios desfavorables en la correlación de fuerzas. En otras palabras, el incremento en los gastos militares no solo se destina a la defensa, sino también es posible que los mismos militares inicien los conflictos para mantener o fortalecer su posición estratégica:

“Además de todo esto, el aumento de los gastos militares, esa “tornillo sin fin”, puede llevar a la tendencia a no dejar pasar ningún momento favorable sin utilizar la superioridad militar temporal o sin iniciar un conflicto militar cuando se lo considere necesario para impedir un nuevo cambio desfavorable en la correlación de fuerzas militar” (Ibídem, 1973, p.86)

Así el aumento del presupuesto militar en Chiapas se convierte en un "tornillo sin fin", donde cada inversión adicional en armamento y tropas está destinado a mantener un control riguroso. En este sentido, la militarización intenta prevenir que los movimientos se expandan y ganen simpatía para así, evitar que las demandas por justicia y autonomía crezcan y desafíen el orden establecido:

“Así es como se nos presenta el militarismo moderno. No pretende nada más ni nada menos que la cuadratura del círculo; arma al pueblo contra el propio pueblo (..) Quiere ser al mismo tiempo democrático y despótico, ilustrado y maquinista, al mismo tiempo servir a la nación y ser su enemigo” (Ibídem, 1973:30)

De esta forma, el militarismo moderno en su afán de preservar el orden capitalista, se convierte en despótico a medida que violenta a las comunidades que supuestamente debe defender, actúa como una fuerza moderna y avanzada que, posee tecnología militar y estrategias de control social que se utilizan para reprimir a un sector empobrecido y marginado que demanda cambios en el orden social y económico. Se presenta como democrático y protector, pero es una herramienta de control y opresión. Siendo así, la militarización en Chiapas opera a través de sus múltiples facetas de forma represiva, armando a paramilitares para que actúen en contra del propio pueblo y desarticulando cualquier intento de transformación o lucha social.

2.3. La militarización en América Latina

En Latinoamérica, los gobiernos fundamentan su modelo económico en el extractivismo, siendo muy significativo para las élites la extracción de recursos naturales como el agua, los minerales y la tierra. Según Zibechi (2017), la extracción de recursos y riqueza de las regiones oprimidas, es un rasgo definitorio del sistema capitalista, pues se refleja una formación social en la que, la explotación y el despojo de estas regiones son fundamentales para el funcionamiento y la expansión del capitalismo global:

“La violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares” (Ibídem:p.87)

En Chiapas, cada muerto, herido o desaparecido es un testimonio de cómo la violencia se ha integrado en el funcionamiento del modelo extractivista, siendo estos actos de represión esenciales para mantener el sistema en funcionamiento con la violencia que no solo es sujeta a el territorio, sino que silencia a las comunidades que se oponen a la explotación de sus tierras y recursos. Zibechi señala que la violencia es el principal mecanismo de la acumulación por desposesión, y que tanto los poderes estatales como los paraestatales y privados actúan como agentes de esta violencia. De esta forma, la violencia en Chiapas, lejos de ser un desbordamiento accidental, es parte integral del modelo de acumulación, pues la violencia y la militarización crean un ambiente donde las comunidades y los derechos de éstas son ignorados o reprimidos. Bajo este entorno de violencia y represión se asegura que los recursos naturales puedan ser explotados sin oposición significativa, perpetuando un ciclo de desposesión y explotación:

“En las circunstancias de países con estados débiles y altas concentraciones de pobres urbanos, los mecanismos biopolíticos se inscriben como parte del proceso de militarización de la sociedad. En tanto, las fuerzas armadas son las que ocupan durante un tiempo el lugar del soberano, reconstruyen el estado y ponen en marcha –de modo absolutamente vertical y autoritario– los mecanismos biopolíticos que aseguran la continuidad de la domi nación” (Zibechi,2007 p.183)

La intervención militar en Chiapas se traduce de la manera en que asume funciones típicas del soberano y se establecen mecanismos de control de manera vertical y centralizada. Para que las decisiones se tomen de arriba hacia abajo sin participación local, asegurando que el desarrollo capitalista y la explotación de los recursos avancen sin obstáculos. Así,

en Chiapas, la militarización se convierte en un instrumento a favor de las clases dominantes, diseñado para mantener el control sobre una región rica en recursos naturales, y por otro lado las comunidades son las que sufren las consecuencias. Este enfoque asegura la estabilidad del capitalismo en la región y protege los intereses de una minoría privilegiada, relegando a la mayoría de la población a una posición de subordinación y explotación.

La discusión que Zibechi aporta, es una perspectiva importante sobre el papel que juega la militarización en el proceso de la acumulación capitalista, y contribuye a reflexión sobre el contexto chiapaneco. Expuesto esto, es importante reiterar que la militarización en Chiapas no se limita a las Fuerzas Armadas, se expande con el paramilitarismo, y sobre todo en el contexto de violencia actual, que involucra la participación del crimen organizado armado. Este doble abordaje nos permite comprender la articulación del crimen organizado, considerando que actualmente éste es fundamental para entender el proceso de acumulación capitalista. Consideramos también importante incorporar la discusión de Rita Laura Segato y David Barrios Rodríguez sobre la economía sumergida, y su morfología con la economía legal. Al integrar estas perspectivas con las discusiones de los autores anteriores, obtenemos una mejor comprensión de, cómo la militarización de la sociedad y el crimen organizado se articulan en sí mismos por encima de los pueblos, para el fortalecimiento del Capital y así también, cómo la interrelación se traduce en la realidad de Chiapas.

Rita Laura Segato (2014) aborda el contexto de violencia y desintegración social que se desarrolla en la actualidad con dos conceptos que consideramos pertinentes en el análisis de nuestro problema; *Primera Realidad* y *Segunda Realidad*. Antes de abordar lo que estas dos realidades engloban, es importante establecer que, dichas realidades no están separadas la una de la otra. La primera realidad engloba a las actividades del Estado, ya que en ella la economía formal florece y es protegida por todo un sistema político legal y con sus diferentes versiones de fuerzas de seguridad: policiacas y militares. Simultáneamente existe la segunda realidad donde se articula con el capitalismo no reconocido, en el capitalismo sumergido, es decir en lo informal. La importancia de la segunda economía, supera a la primera economía, y las enormes fuentes que genera y supervisa el Capital sumergido, es protegido por cuerpos de seguridad propios; grupos

armados del narcotráfico. Esta teorización nos permite concebir al crimen organizado, al igual que al Estado como parte del proceso de acumulación capitalista, de modo que, se observa el vínculo existente entre ambos.

Tanto en la Primera Realidad, como en la Segunda Realidad; la prioridad de la protección de la propiedad es central, es decir, la forma en que se formula la protección es por medio de la violencia ejercida por las fuerzas armadas, ya sea legítima o ilegítima, o bien en conjunto. Segato subraya que la violencia no puede mirarse como anómala o irregular, o peor aún como algo que existe por la fragmentación del Estado. Se debe entender que por las dinámicas del Capital – del Capital de la Primera y Segunda Realidad – que buscan expandirse y entrelazarse en el entorno Estatal, el Estado existe en interconexión con la Primera y la Segunda Realidad. En efecto es la dinámica de duplicidad del Estado.

En el capítulo inicial, damos cuenta de que la caracterización de la militarización en Chiapas no es a causa de una confrontación bélica entre Estados-naciones, más bien es de intereses geopolíticos en diversas etapas. Ahora, se podría creer que para que exista la militarización, la profundización del poder militar en todas las esferas de la vida, requiere de un contexto de guerra. Pero la guerra en la que Chiapas vive, sin mencionar a todo el país, (y también añadiríamos otras geografías de nuestra región) no dispone de un carácter bélico entre Estados formales. Segato reafirma que estamos viviendo una guerra no convencional, y nombra a esta nueva forma de guerra como la guerra informal, es una guerra para-estatal donde el territorio es disputado entre corporaciones armadas en colaboración tanto con entes estatales, como paraestatales.

La Segunda Realidad constituye un lugar fundamental en el contexto actual chiapaneco. Como sostiene Segato, esta realidad se articula para favorecer el proceso de acumulación capitalista. La manera en que está organizada la Segunda Realidad es, a través del Segundo Estado, en él son las diversas corporaciones armadas quienes marcan la acción. Estas exhiben la crueldad como un mecanismo de control sobre los pueblos y el territorio. En otras palabras, el crimen organizado armado es quien domina en la Segunda Realidad, y la economía que produce es extraída de una extensa red de actividades y transacciones ilegales. En el capítulo inicial, damos cuenta de cómo en Chiapas, este proceso se ha visto acelerado drásticamente en los últimos años, de tal modo que trastoca y desestabiliza la vida de las poblaciones. Siendo el caso de los municipios de Comalapa y El Porvenir que

al encontrarse cerca de la frontera con Guatemala enfrentan una violencia sin precedentes, pues son víctimas de la Guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa que se disputan el control del territorio para el tráfico de drogas, de migrantes y de armas, haciendo que los pobladores se vean obligados a huir de sus hogares para buscar un refugio temporal (Sin Embargo, 2024).

La autora explica que, el campo de batalla no persigue la paz, la militarización o guerra no es con el fin de una paz, sino la continuidad y propagación de la guerra. En esta teorización la guerra es para el Capital, un último espacio de colonización/dominio, donde se caracteriza por despojar, lucrar y crear espacios de violencia. El nuevo contexto de la guerra no convencional, se desenreda dentro de un nuevo accionar bélico producido por varios escenarios: la desestabilización política, el mercado global y las fases críticas del capitalismo. De manera similar esto se debe a la transformación en la territorialidad, la política, el Estado, la economía y el patriarcado. Quienes se enfrentan en el terreno son, las corporaciones armadas, las fuerzas estatales y para-estatales. Siendo estos últimos, agentes de la seguridad pública; militares y policías.

Aunque en esta guerra no convencional, se podría pensar que el Estado no esté, dado que la acción es para-estatal, la realidad es contraria; el Estado continúa presente de manera duplicada. En el escenario de una nueva forma de guerra, se manifiestan interconexiones entre los diferentes tipos de actores criminales y el Estado a efectos de reforzar el control sobre el territorio y sobre los pueblos bajo la estructura patriarcal como elemento central. Segato indica esto puesto a que las mujeres, y los cuerpos femeninos o feminizados son el objeto estratégico o *el bastidor de la estructura de guerra*, donde los cuerpos femeninos se perciben como otro territorio a someter, a través de lo que la autora nombra pedagogía de la crueldad¹⁴

A partir del análisis de la autora, se comprende que la violencia de género, amenaza no sólo al individuo (o más bien a la individua), sino a toda la colectividad. Dado que esta amenaza es un mecanismo de control general sobre lo colectivo al dirigirlo sobre cuerpos no combatientes. Esta amenaza como lo explica Segato, es la forma de asegurar el control sobre el territorio y el cuerpo. Este último como espacio territorial que de igual forma puede

¹⁴ Estrategia de reproducción del sistema

ser dominado. El interés de regular el territorio se establece con mecanismos de violencia como es el despojo y la contrainsurgencia para así, generar un entorno de terror e inseguridad para los pueblos que habitan el territorio. La forma en que gestiona el espacio territorial es, a través de estrategias que buscan romper la solidaridad colectiva y desplazar a las personas del territorio. De esta forma, se sostiene que las manifestaciones de violencia existen esencialmente ligadas al Estado, en reacción contra todo aquello que se oponga y resista a lo que éste plantea.

Situando este análisis en Chiapas, Mercedes Olivera (2019) expone la amenaza que supone la violencia de género para la colectividad. Una violación o agresión sexual a una mujer no solo agrede al cuerpo violentado, también agrede al cuerpo colectivo, es decir a toda la comunidad. Esto se da a entender en el caso de la violación perpetrada por el Ejército mexicano a tres mujeres tzeltales zapatistas en 1994. Las mujeres hasta la fecha no solo exigen reparación por la violación cometida hacia ellas, sino que exigen una reparación de la violencia desde lo colectivo para todas las mujeres zapatistas y para la organización zapatista en general.

Para comprender la violencia de género como mecanismo de control sobre el cuerpo y el territorio en Chiapas, es necesario incorporar la GBI dentro de este análisis. La GBI transformó y sigue transformando a los cuerpos femeninos o feminizados como el objetivo y el objeto de guerra. Olivera subraya a las mujeres como el objeto de guerra en la masacre de Acteal, donde la mayoría fueron mujeres masacradas. La autora señala también la crueldad de la masacre y la forma en que los paramilitares en su actuar brutal dieron un mensaje claro de amenaza de "...acabar con la semilla" (Ibídem, 2019). La violencia de género fue dirigida específicamente como violencia simbólica hacia la maternidad en las siguientes acciones: el obligarles a testificar el asesinato de sus hijos y el abrir el vientre a mujeres embarazadas. Estos actos violentos de género, se entienden como una simbología de terror impuesta sobre la conciencia colectiva de la comunidad.

Complementando esta perspectiva de Segato, David Barrios Rodríguez (2023), también analiza las dinámicas de control y violencia, definidas por agentes armados en América Latina. Rodríguez cuestiona los impactos de la militarización social en la región, y la describe como individualismo, competitividad, consumismo, así como la aceptación y la normalización del abuso en las relaciones. Sobre la violencia que surge en la disputa por el

control sobre los territorios y sobre las poblaciones que las habitan, Rodríguez al igual que Segato, no la define como anómala. Adicionalmente afirma que el Estado se ocupa de la violencia para consolidarse de tal modo que, el reordenamiento territorial a través de proyectos capitalistas, y la fragmentación que genera en el espacio, favorece procesos de acumulación. El mecanismo que conduce a la reconfiguración territorial también tiene una función de disciplina sobre la población, es decir, se impone la disciplina a través del miedo. Este mecanismo es claramente visible en casos que hemos referido sobre desplazamientos forzados, amenazas y asesinatos en el contexto de Chiapas.

Ahora bien, la militarización de la sociedad tiene que ver con la acumulación capitalista, y no con la seguridad de las personas. Se plantea que la violencia imperante es una dinámica que está presente en todo el país. Así mismo en este sexenio se ha institucionalizado la estrategia de militarizar a la seguridad pública con la Guardia Nacional, junto con la incrementación del actuar militar en tareas civiles. En este contexto político el autor reafirma que la violencia armada organizada no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. La militarización de la sociedad genera una política central de miedo. Si bien, no vivimos una guerra bélica entre naciones, vivimos una forma de guerra, donde lo que opera es la guerra de baja intensidad.

El contexto de militarización social que Rodríguez desenreda, se sitúa en una zona sin fronteras claras entre lo legal/formal y lo ilegal/informal, es decir, entre lo reconocido y lo criminalizado. Para que esta situación se produzca, el Estado pierde su papel central, por lo que ya no se percibe como la clave del orden social. En consecuencia, este vacío permite que otros grupos armados, además de las fuerzas de seguridad legal, entren y disputen el control de los territorios. En Chiapas el territorio se vuelve el espacio de disputa para la producción y sustracción de bienes, en otras palabras, el espacio para la acumulación. Las prácticas monopolíticas perpetúan un ambiente violencia armada y fragmentación en los pueblos que habitan los territorios:

[...]las políticas de “seguridad” han permitido encubrir procesos de disciplinamiento social contemporáneos que reordenan a la sociedad a través de la militarización y la guerra [...] el capitalismo contemporáneo en crisis hace uso de dispositivos securitarios, mismos que constituyen una pieza fundamental para su funcionamiento. Al mismo tiempo, las formas de violencia armada organizada establecen disputas securitarias que se manifiestan en

ámbitos desdoblados, oscilando entre lo formal-legal y lo informal-ilegal[...]
(Rodríguez, 2023, p. 25-26)

Rodríguez plantea que el Estado se nutre del caos y la violencia, y que esta última va de la mano con el crecimiento económico. De nuevo se sostiene que la violencia es la forma del sistema, y no una anomalía. Además, analiza que el crimen organizado hoy en día es un Estado propio, que va acumulando funciones tradicionalmente del Estado formal y, por otro lado, el Estado formal, se caracteriza más al crimen organizado en la forma en que opera. En este análisis, el autor señala que las funciones del Estado cambian en línea con su modificación a un proyecto neoliberal de Estado.

Al examinar el nexo entre la violencia, la acumulación del Capital, y la reproducción de la vida misma, tanto el concepto de Segato de Segunda Realidad como la discusión de Rodríguez sobre el Estado informal proporcionan una ilustración interesante de cómo el “submundo” y el “supramundo” coexisten y trabajan juntos. Aunque ambas perspectivas enfatizan el nuevo rol que el Estado y la Segunda Realidad han adquirido; Segato se enfoca principalmente en el rol del Estado como un mecanismo coercitivo que se articula con la violencia del crimen organizado. Rodríguez por otro lado reconoce este mecanismo, pero también agrega otro matiz; el nuevo rol del Estado informal que, anteriormente estaba bajo la jurisdicción del Estado formal: control sobre las tierras, implementación de impuestos, etc. Esta nueva fuerza dentro del Estado informal evidencia el poder que ha adquirido el crimen organizado; y esta fuerza es especialmente evidenciada en regiones donde el crimen organizado opera y administra toda la vida social¹⁵. Escenarios como el de Chicomuselo y Tila, retratados en el capítulo primero, ilustran y alertan sobre el avance del control y poder del crimen organizado en Chiapas.

Ahora bien, ante este contexto de guerra informal, es interesante exponer el argumento que plasma Segato como propuesta de reconstrucción social. Se trata en específico de la reconstrucción del tejido social en las comunidades, y en el restablecimiento de la autonomía en las comunidades y de su ejercicio de la libre determinación. Dentro de esta perspectiva las comunidades unificadas y en lucha, estas poseen diferentes formas de

¹⁵ Estudio de caso de David Barrios Rodríguez sobre los fenómenos de securitización y militarización en la región centro sur de Michoacán. (La vida entre cercos. Militarización social en América Latina en el siglo XXI, 2023).

preservar y continuar su organización de vida, la base de estas formas es la solidaridad entre pueblos. En esta propuesta, de nuevo vemos cómo la resistencia y organización va hilando las formas de hacer frente al escenario de guerra que traspasa e intenta tragar a los pueblos en Chiapas.

REFLEXIONES FINALES SOBRE EL SENDERO DE MILITARIZACIÓN Y EL CONTROL DEL TERRITORIO EN CHIAPAS.

La narrativa gubernamental que presenta al Ejército como una fuerza salvadora que trae paz y orden a los pueblos ha quedado desmentida por los efectos adversos que genera su presencia prolongada; en lugar de reducir la violencia, la militarización se ha intensificado. En muchas ocasiones las Fuerzas Armadas coexisten e incluso colaboran con actores del crimen organizado y con empresas transnacionales que buscan explotar los recursos de las regiones. Esto contribuye a la creación de un ciclo de violencia que afecta el bienestar económico, político y social de las comunidades.

Iniciativas como el programa Sembrando Vida que, en teoría debería fortalecer las economías locales, termina por subordinar a las comunidades en dinámicas externas que no respetan sus conocimientos ni sus valores. Obligándolas a depender de proyectos que no nacen de sus propias necesidades. Siendo un ejemplo el Tren Maya, que se presenta bajo el discurso del desarrollo y el bienestar, pero que prioriza los intereses económicos del Capital, por lo cual ha generado un rechazo en las comunidades, pues no se han respetado los derechos de éstas y en lugar de incluirlas en los procesos de toma de decisiones, se les impuso un modelo de desarrollo que transforma su entorno natural y social.

De esta forma se ha instaurado, un clima de miedo y represión, donde la militarización no sólo ejerce un control territorial, también ejerce un control en la población civil. Esto limita gravemente el ejercicio básico y fundamental de los derechos de los pueblos a la libre expresión, a la organización comunitaria y a la autonomía. Este proceso de militarización silencia a las voces de los pueblos y comunidades, y niega su participación activa en la toma de decisiones y en las diferentes movilizaciones y expresiones que ellos hacen en defensa de sus territorios y recursos.

A su vez, la militarización también ha traído consigo efectos devastadores; el desplazamiento forzado de pueblos, secuestros, desapariciones y un incremento de la violencia que agravan aún más la situación de vulnerabilidad. En la actualidad, estas comunidades se ven obligadas a integrarse en un sistema que las explota, las despoja de sus tierras y desmantela su tejido social. Esto con el objetivo de subordinar sus tierras y su mano de obra al servicio de Capital.

El pasado (y presente) racista de Chiapas contribuye innegablemente a la forma en que, la militarización ha controlado y sigue controlando la vida de las personas y la administración de los territorios en la región. Cientos de años en opresión, explotación de las riquezas naturales y explotación de los pueblos están inscritos en la dominación política del Estado. Hemos señalado el miedo extremo que los militares impusieron sobre los pueblos, así también como los horrores que causan los diferentes mecanismos de control. Estos factores son la clave para entender la desconfianza y el rechazo que hasta el presente los pueblos mantienen hacia la presencia militar en sus comunidades. Las comunidades conocen de primera mano el verdadero rostro de los militares, ya sea disfrazados de paramilitares o con su propia insignia.

Los impactos de la continuidad de una estrategia militar contrainsurgente traducida en una Guerra de Baja Intensidad, han causado la ruptura del tejido social en las comunidades. Tanto la violencia armada como psicológica, busca desgastar y dividir a los pueblos, es bajo esta lógica de dominación que hasta el día de hoy el pueblo de Chiapas vive.

La remilitarización actual de Chiapas continúa con la misma lógica de despojo y acumulación que ha caracterizado a la región desde tiempos pasados. La disputa sigue siendo la misma: el control territorial y la subordinación de los habitantes. Junto a este escenario de muerte y destrucción de la vida comunitaria y solidaria de los pueblos, emergen aceleradamente las organizaciones armadas del crimen organizado, que también luchan por el control del territorio y de la población. Es crucial integrar en la discusión sobre la militarización a estos actores de la Segunda Realidad, ya que son importantes para entender el proceso de acumulación capitalista, sin dejar de lado la Primera Realidad, puesto que ambas están entrelazadas en la extracción de la economía y en la protección de la propiedad privada mediante el uso generalizado de la violencia en la región.

Los efectos de la militarización han sido devastadores para la vida y la organización de los pueblos, y se manifiestan en términos políticos, económicos y sociales. Una de las formas más concretas que evidencia los impactos de la militarización se presenta a través del despojo y la destrucción del territorio, este proceso que discuten lxs zapatistas, genera el debilitamiento del tejido social y la imposición de nuevas identidades para adaptar a los pueblos adecuadamente a las exigencias del Capital. A pesar de los esfuerzos por dividir y fragmentar a los pueblos, estos han propuesto a lo largo de los años la reconstrucción de la colectividad, el tejido social y la búsqueda de alternativas frente al proyecto de destrucción que se les impone y trastoca.

En medio de la disputa entre la vida y la muerte, Las Abejas de Acteal y el EZLN como pueblos originarios y organizados que caminan en la autonomía proponen frente al terror del Estado: la resistencia y organización. Actualmente existe la propuesta del Común de lxs zapatistas, la cual ya hemos mencionado. La propuesta del Común consiste en re-tejer el tejido social de los pueblos, no solo, de lxs zapatistas, sino de los pueblos en general.

La reconstrucción de los lazos comunitarios se piensa desde el colectivo y la no propiedad, comenzando con trabajar la tierra – empezando con reconstruir el territorio en común, el territorio que es objeto de disputa. Desde las tierras recuperadas en el levantamiento armado zapatista de 1994, la nueva propuesta de vida del EZLN consiste en, trabajar la tierra en común y repartiendo las ganancias de la madre tierra entre las manos que la trabajan. Es así cómo se organizan frente a las violencias y amenazas de grupos paramilitares. Violencia que llega a través de los programas sociales de Sembrando Vida, ya que buscan despojarlos de la tierra recuperada. En el Común no existe el dueño ni papeles, no existe a quien comprar, asesinar, o desaparecer con el fin de comprar la tierra. En común la tierra es de todxs, y todxs la cuidan y la trabajan. El control del territorio siempre ha sido la forma en cómo el Estado ha fragmentado a los pueblos. Por eso el Común es tan significativo en el contexto crucial que vive actualmente Chiapas pues forma parte de un proyecto diferente y de resistencia para los pueblos ante la militarización, el paramilitarismo, la violencia, el crimen organizado, el despojo de la tierra, y la entrada de los megaproyectos.

Desde nuestra mirada esta forma de resistencia junto con otras propuestas de autodeterminación y organización, simbolizan un camino distinto al proyecto capitalista de muerte y extractivismo. Lo que lxs zapatistas y otros pueblos organizados encaminan, es la construcción de la vida en equilibrio, en paz, y con respeto para los pueblos, es decir, la construcción del Lekil kuxlejal y en contraposición a la guerra de exterminio del que han sido objeto los pueblos en Chiapas.

Esta reflexión que hacemos desde las primeras hojas busca articular nuestras preocupaciones acerca del proceso de remilitarización en Chiapas en su contexto histórico y actual, que es la institucionalización de la militarización a nivel nacional. La reflexión de la militarización actual de Chiapas no se puede comprender sin abordar el contexto del crecimiento y de la presencia de organizaciones criminales en el Estado, no porque estos actores sean la razón de la militarización, sino que estos procesos de incremento, tanto de la militarización como de violencia criminal, coexisten y colaboran. Buscamos contribuir a la discusión continúa sobre la lógica de la militarización y sus impactos en los pueblos de Chiapas. Aunque el caso de Chiapas ofrece un contexto específico por sus diversos actores, los conceptos que exploramos con lxs autorxs en el capítulo segundo, son desde discusiones y análisis que no brotan desde la militarización en Chiapas, pero que en la teorización de la militarización nos lleva a discutir el proceso de acumulación capitalista, despojo, violencia y represión – y esta es una experiencia global en cual posteriormente se puede enfocar en otra región, dado que los procesos de acumulación capitalista deteriora a todos los pueblos.

Esta reflexión invita a continuar la discusión crítica sobre la militarización para no sólo analizar las implicaciones sociales, políticas y económicas, sino también para analizar los efectos a largo plazo dentro del país y en las comunidades. Para trabajos posteriores y de largo plazo, sería pertinente retomar las voces y perspectivas directas de los pueblos en resistencia, acerca de su experiencia de vivir bajo la militarización. Dado que, estas voces son las que ponen el cuerpo, en Común, para la construcción de horizontes alternativos y desmilitarizados. Horizontes que deseamos desde la ciudad hasta el campo.

NOTA FINAL

Al término de este trabajo, ocurrieron dos actos graves de violencia en Chiapas. Consideramos imprescindible mencionar en estas páginas los recientes ataques, para plasmar y reafirmar el escenario de violencia que se desborda en Chiapas, pero también para hacer memoria de los ataques al poblado zapatista “6 de octubre” y del asesinato al Padre Marcelo Pérez Pérez. Estos actos de violencia como otros tantos que vienen sucediendo en Chiapas, han sido ignorados y callados.

Los ataques al poblado zapatista “6 de octubre” perteneciente al Caracol Jerusalén y fundado en 1997 sobre tierras recuperadas en el levantamiento de 1994, se dan en el contexto actual de violencia en Chiapas, y en continuación a la Guerra de Baja Intensidad hacia lxs zapatistas. Lxs zapatistas han trabajado estas tierras de forma pacífica por más de 30 años, sin embargo, en los últimos meses han sido víctimas de graves amenazas de desalojo y desplazamiento forzado por parte de pobladores de Nueva Palestina, que en complicidad con el crimen organizado y las autoridades del municipio de Ocosingo, buscan apropiarse de las tierras zapatistas.

Desde el mes de junio, hombres portando armas de distintos calibres recorren el poblado amenazando a lxs habitantes. Asimismo, dos bases de apoyo zapatista recibieron amenazas de abandonar sus tierras por “la buena o por la mala”. En septiembre los agresores entraron al poblado zapatista con el objetivo de intimidar y de construir chozas para incitar a la provocación. Los agresores del poblado Nueva Palestina, controlan programas sociales como Sembrando Vida, rentando las tierras que han tomado de otros campesinos mediante préstamos (muchos de estos préstamos están relacionados con la venta de alcohol que los comuneros manejan) y obligan a otros campesinos a trabajar en ellas, bajo el pretexto de participar en dicho programa (La Jornada, 2024).

El EZLN (2024) mediante un comunicado denunció que esta escalada de violencia afecta a mujeres, ancianos, niños y hombres del poblado “6 de octubre”. Además, los agresores han hecho amenazas de violación a mujeres, quemas de viviendas, robo de bienes, cultivos y animales. Señalan también que existe presión por parte del crimen organizado para desalojar a lxs zapatistas del territorio, además afirman que, el crimen organizado en

conjunto con los tres niveles de gobierno colaboran para proporcionar papeles que acrediten la propiedad de las tierras (tierras zapatistas) a los agresores de Nueva Palestina, otorgando un estatus legal al proceso de desalojo.

El 20 de octubre del 2024 se agrava la situación de violencia en Chiapas, por la mañana de ese día es asesinado Marcelo Pérez Pérez, sacerdote y defensor de derechos humanos, después de officiar una misa en San Cristóbal de Las Casas. El padre Marcelo era maya tsotsil, originario de San Andrés Sakamch'en de los Pobres, Chiapas, quien dedicó su vida al acompañamiento y a la defensa de los pueblos desde su fe católica por más de veinte años. La masacre de Acteal convirtió al padre Marcelo y reafirmó su compromiso de andar con el pueblo, y en sus palabras el acompañamiento era: "llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren...(y) caminar con ellos" (Desinformémonos, 2024)

En este caminar con los pueblos, alzó la voz por ellos y denunció la violencia que azota al estado de Chiapas. Denunció principalmente al narco-Estado que rige en Chiapas, lo cual hizo que fuera objeto de amenazas y agresiones por parte del crimen organizado. En entrevista con Raúl Zibechi en 2022, relató la persecución, amenazas y agresiones que sufrió a través de los años, primero por parte del gobierno de Chiapas, y posteriormente por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades. Por cuestiones de su seguridad, fue trasladado dos veces, primero a Simojovel, y posteriormente y última vez a la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas.

El padre Marcelo tenía claro que su caminar con los pueblos y el no callar ante la violencia ponía en riesgo su vida: "Si me matan a mí es un escándalo, pero si matan a un campesinos no pasa nada. Si ayuda dar mi vida, aquí estoy" (Ibídem, 2024) Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en el 2015 al Estado mexicano la protección del padre Marcelo a través de medidas cautelares. Sin embargo, el Estado mexicano ignoró esta orden y perpetuó la persecución al padre Marcelo. Se intentó criminalizarlo fabricando campañas mediáticas en su contra, y en el 2021 la Fiscalía General de Chiapas emitió una orden de aprehensión en su contra vinculándolo al crimen organizado, bajo acusaciones falsas. (Frayba, 2024)

Los recientes ataques violentos hacia los que defienden la vida en Chiapas subrayan la amenaza y violencia constante hacia las comunidades zapatistas y hacia lxs defensorxs de derechos humanos. Lxs zapatistas al igual que el padre Marcelo advirtieron sobre el

desborde de la violencia en Chiapas, en específico lxs zapatistas mencionaron que Chiapas estaba al borde de una guerra civil. La situación actual atemora lo que está por venir, pero esta realidad no se puede entender sin ver el papel de los actores que han abierto de manera frontal la puerta hacia la violencia; militarización, paramilitarismo y crimen organizado. Bajo estas lógicas de miedo se han implementado mecanismos de control sobre los pueblos y los territorios, los cuales han generado y profundizado la fragmentación del tejido social. La militarización, el paramilitarismo y el crimen organizado operan bajo la lógica de despojo y acumulación capitalista, que lleva al proceso de desplazamiento, violencia, muerte y represión.

Estos últimos ataques se suman a los demás actos de violencia en el estado, y nos reúne nuevamente a la urgencia de hacer frente a la violencia desbordada. Violencia que es impulsada por una lógica militar que protege y da paso a un proyecto de extractivismo y de muerte, es decir, el proyecto capitalista. Frente a esta reiterada escalada de violencia hacia los pueblos y hacia los defensores de derechos humanos, vemos imprescindible el poner alerta a la situación por la que vive Chiapas, ya que consideramos a los pueblos originarios en resistencia y las comunidades zapatistas como el único eslabón de esperanza ante la amenaza contra la vida y el territorio. Como hemos subrayado, estos proyectos de vida que proponen y llevan a cabo los pueblos en resistencia son ejemplo de un andar encaminado a la construcción del tejido social y de la vida, la justicia y la paz. Por lo tanto, hoy más que nunca es vital visibilizar las voces y la lucha de los pueblos en resistencia, especialmente la de lxs zapatistas.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguiano, A. (2019). *Resistir la pesadilla*.
- Ángeles, M. (2024). *Tila, el pueblo de Chiapas que huyó de la violencia. Más de 4 mil desplazados*. ChiapasParalelo.Chiapas
- Aristizábal, D. (2023). *Violence, development and legitimacy: paramilitarism and the state in Colombia 1989-2016*. Berkley University.
- Art of Commune. (2021). *Breve cronología de la violencia paramilitar en Chiapas*. Blog del comité de apoyo a Chiapas.
- Barrios, D. (2023). *La vida entre cercos: militarización social en América Latina en el Siglo XXI*. UNAM. México
- Caffentzis, G. (1998). *The Politics of Massacre: Acteal, Low Intensity Warfare and NGOs*. <https://schoolsforchiapas.org/wp-content/uploads/2014/03/Understanding-the-Acteal-Massace.pdf>
- Chiapas: el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía*. (1994a). Enlace Zapatista. <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/01/27/chiapas-el-sureste-en-dos-vientos-una-tormenta-y-una-profecia/>
- CMDPDH. (2019). *Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México*. México
- Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas & Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia (1996). *Militarización y Violencia en Chiapas*.
- Coutiño, G. (2024). “*Nos están matando y no hay quien nos pueda ayudar*”, dicen habitantes de Chiapas”. La Jornada. México
- de Ita, A., Salgado Ramírez, Á., DESMI & et al., (2021). *Comunidad y autonomía, frente a Sembrando Vida*. Ceccam.
- Defensa Nacional (2019). *Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos Defensa Nacional*. Hacienda. México.

Desinformémonos. (2024). *Asesinan al padre Marcelo, quien había denunciado la extrema violencia en Chiapas*. Lo acribillan después de oficiar misa. México

Diario Oficial de la Federación (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*. Secretaría de Gobernación. México

Domínguez, O. H. (2006a). *Tras los pasos de una guerra inconclusa: (Doce años de militarización en Chiapas)*.

Educa. (2024). *Chicomuselo: Nuevos desplazamientos tras enfrentamientos y ausencia del estado*. Servicios para una educación alternativa. Educa Oaxaca

Fazio, C. (1996). *El tercer vínculo: de la teoría del caos a la militarización de México*

Fernández, P (2003). *El EZLN y la GBI en Chiapas: derechos indígenas contra corporaciones transnacionales*. UNAM. México

FRAYBA. (2024). *Condenamos la ejecución del defensor de derechos humanos y sacerdote jTatik Marcelo Pérez Pérez*. Chiapas

FRAYBA. (2023). *Chiapas un desastre Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado*. Chiapas

FRAYBA. (1999a). *Los grupos paramilitares en Chiapas*. Chiapas

Galindo, A. (2015). *El paramilitarismo en Chiapas Respuesta del poder contra la sociedad organizada*. Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM

Henríquez, E. (2023). *En Chiapas, agrupaciones se manifiestan contra el Tren Maya y megaproyectos*. La Jornada. México

Hernández, L. (2024). *Chiapas, la guerra civil llama a la puerta*. La Jornada, México.

Jiménez, E. (2024). *Denuncian a militares por enfrentamiento con campesinos que dejó dos muertos en Chiapas*. Infobae. México

Jiménez, E. (2024). *Mexicanos huyen a Guatemala por el narco guerra de Chiapas*. Infobae. México

Julio Astillero. (2023, 2 junio). *'Sembrando Vida' está siendo utilizado como programa de contrainsurgencia en Chiapas: Raúl Romero* [Vídeo]. YouTube.

- La libertad según lxs zapatistas: manual de la Escuelita Zapatista. (2016).
- Liebknecht, K. (1907). *Militarism & anti-militarism*. Rivers Press Limited, Cambridge, 1973.
- Luxemburg, R. (1912). *La acumulación del capital*. Grupo Germinal. México
- Mandujano, I. (2021). *Mujeres víctimas de la masacre de Acteal protestan frente a cuartel militar*. Chiapas Paralelo. Chiapas
- Morales, Y. (2021). *Zoques, tseltales y tsotsiles rechazan megaproyectos por temor a violencia, despojo y desplazamiento*. Chiapas Paralelo. Chiapas.
- MUCD (2024). *Con el avance de la militarización en Chiapas, FFAA violentan y abusan de los pobladores; exigimos desmilitarización y justicia*. Ciudad de México
- Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (2019). *Militarización del Sureste mexicano*. UNAM. México
- Ochoa, P. (2011). *Conflicto armado y grupos paramilitares en Chiapas*. Desafíos 23 I, pp. 175-216.
- Olivera, M. (2019) *Feminismo popular y revolución. Entre la militancia y la antropología*. Clasco, p. 413
- Poder. (2024). *MILITARES S.A. DE C.V. Otra vía al militar-Istmo*. México
- Programas para el Bienestar. (2022). *Sembrando Vida*. Palacio Nacional. México
- Ravelo, R. (2024). *Narcotráfico: Chiapas, estado sin ley. SinEmbargo*. México
- Rovira, G. (2024a). *ZAPATA VIVE: Epílogo de Mayor Ana María*.
- Santiago, A. (2023). *Militarización, ecocidio y división comunitaria deja a su paso tren maya*. Avispa Midia.
- Secretaría de Cultura. (2023). *Gran Guía Tren Maya*. México
- Secretaría de la Defensa Nacional. (1994) *Plan de Campaña Chiapas 94*. Disponible en: <https://frayba.org.mx/conoce-el-plan-de-campana-chiapas-94-0>

- Segato, R. (2013). *Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres*. Tinta Limón. México
- Subcomandante, G. (2021). *CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL*. Enlace Zapatista. Chiapas
- Subcomandante, M. (2003). *¿Cuáles son las características fundamentales de la IV Guerra Mundial?* Enlace Zapatista. Chiapas
- Subcomandante, M. (2024). *El EZLN denuncia agresiones y amenazas contra sus bases de apoyo*. Enlace Zapatista. Chiapas
- Xantomila, J & Laureles, J. (2024). *Esfuerzos del Estado contra violencia en Chiapas han sido insuficientes: CIDH*. La Jornada. México
- Xantomila, J & Laureles, J. (2024). *Aumenta desplazamiento forzado en Chiapas por crimen organizado: ONGs*. La Jornada. México
- Zibechi, R (2007). *Autonomías y emancipaciones América Latina en movimiento*. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. Lima
- Zibechi, R. (2024). *Las múltiples caras de la militarización en América Latina*. NACLA. <https://nacla.org/multiples-caras-militarizacion-america-latina>
- Zibechi, R. (2017). *No secarán la Tierra*. Grito Manso. Lima